

ACTA DE LA 11ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL AEROPUERTO DE DON QUIJOTE

Fecha: 13 de marzo de 2013. 10:40-12:30 h.

Convocatoria efectuada mediante correo electrónico y correo ordinario el 28 de febrero de 2013, facilitando la información objeto de análisis mediante medios telemáticos.

Lugar: Agencia Estatal de Seguridad Aérea; Avenida General Perón, 40 - Portal B, 4ª planta; 28020, Madrid.

Asistentes:

Miembros de la Comisión de Seguimiento Ambiental:

Luis Pastor Botella	Presidente y representante del Ministerio de Fomento - Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Matilde Basarán Conde	Vicepresidenta y representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha – Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental
José María Michelena García	Secretario y representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha – Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental
Adrián Vecino Varela	Representante de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Susana Molinero Herranz	Representante de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
José Joaquín Navarro Rubio	Representante de CR Aeropuertos, S.L. – Administradores concursales de la entidad
Agustín Flores Vadillo	Representante de CR Aeropuertos, S.L. – Administradores concursales de la entidad
Felipe Pulla Piedrabuena	Alcalde y representante de Villar del Pozo
Juan Carlos Moraleda Herrera	Alcalde y representante de Ballesteros de Calatrava
Miguel Gómez Peco	Alcalde y representante de Cañada de Calatrava
José Manuel Hernández García	Representante de Ecologistas en Acción
Juan Carlos Atienza Ortiz	Representante de SEO-Birdlife
Florencio Rodríguez Medina	Representante de ASAJA

Otros asistentes:

María Luisa Muñoz	Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Isabel Calatayud Velasco	SENASA
José María Casillas Barral	SENASA

Se abre la reunión por parte del Presidente, quien efectúa el saludo a los asistentes, agradeciendo su presencia.

Explica los motivos por los que se produce la convocatoria extraordinaria que responden principalmente a las noticias que se van conociendo respecto de la liquidación de la empresa.

Comenta que por problemas de agenda de los convocados, se produjo la anulación de la primera convocatoria, propuesta inicialmente para el 1 de marzo de 2013.



FIRMADO por : ARIZA CANTERO, JAVIER R. SANFELICER, en www.jorj2013.es, mediante
FIRMADO por : FERNANDEZ ORRUEGA, ALVARO JOSÉ, A GCM, en www.jorj2013.es, mediante
Total folios: 10 (1 de 10) - Código Seguro de Verificación: MFOU02S3A1709B2FB6460DFE8CEE
Verificable en https://sede.fomento.gob.es/ O.M de 24/2/2011



Repasa el orden del día, destacando la importancia de los puntos tercero y cuarto, recordando cuál es el papel de la Comisión, y las competencias que corresponden a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante, AESA), y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en adelante, MAGRAMA).

La reunión continúa desarrollando los siguientes asuntos, que se reflejan de acuerdo con el orden del día establecido en la convocatoria.

PRIMERO: Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (10ª), celebrada el 14 de diciembre de 2011.

Puesto que se había distribuido previamente junto con la convocatoria de la reunión el borrador de acta junto con los documentos anexos a la misma, el Secretario pregunta a los asistentes si procede realizar algún comentario sobre el acta de la décima reunión. Al no hacerse ninguna observación, se aprueba por unanimidad su contenido.

SEGUNDO: Aprobación de las Normas de Funcionamiento de la Comisión.

El último borrador de las Normas de Funcionamiento de la Comisión se había adjuntado a la convocatoria, y destacando que era un documento sobre el cual se había trabajado durante varias reuniones anteriores, el Secretario pregunta a los asistentes si queda alguna cuestión que añadir o corregir en las mismas. Ante la ausencia de observaciones, se aprueban por unanimidad las Normas de Funcionamiento de la Comisión.

TERCERO Y CUARTO: Situación actual del Aeropuerto D. Quijote en Ciudad Real, y viabilidad del cumplimiento de las medidas medioambientales y actuaciones ambientales realizadas. Valoración de los últimos informes y estudios realizados en cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

(Debido a la interrelación de sendos puntos del Orden del Día, se comentan entremezclados durante la reunión.)

José Joaquín Navarro Rubio (administrador concursal del aeropuerto) comienza a explicar la situación actual de la empresa Ciudad Real Aeropuertos, S.L.

Recuerda que en noviembre de 2011 los administradores concursales solicitan al Juzgado el cese temporal de la actividad aeroportuaria, siendo en diciembre cuando se transmite a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Esta solicitud suponía tanto el cese temporal de la actividad como prescindir temporalmente de la plantilla, salvo ciertos trabajadores imprescindibles (menos de diez personas).

Esta solicitud se tradujo en la suspensión que emite AESA mediante Resolución del 14 de junio de 2012, imponiendo una serie de medidas que autorizó el Juzgado. El retraso respecto a la solicitud fue debido a la necesidad de subsanación que se detectó por AESA en la documentación preparada por la empresa.

El Presidente corrobora que los plazos entre la solicitud y la resolución se debieron a esta subsanación requerida por AESA, así como por la tramitación preceptiva a través de los Ministerios de Fomento y Defensa, en la correspondiente Comisión Interministerial, y la realización de inspección de las instalaciones por parte de dicha agencia.

J.J.N.R. explica que al principio de 2013 vuelven a plantear medidas ante el Juzgado, debido a que no se han producido avances fructíferos en la venta de las infraestructuras.

En particular, comenta la sucesiva interlocución de una cincuentena de entidades y personas interesadas por el aeropuerto, que por el contrario, adolecían de los siguientes defectos:

- Muchas de las sociedades no estaban todavía constituidas, o únicamente contaban con 3.000 euros de capital social.
- En numerosas ocasiones los interlocutores se presentaban como meros intermediarios con otras sociedades.
- En los momentos de requerirles aval para avanzar con los trámites de la operación, en ningún caso se ha llegado a constituir el mismo.

La última propuesta recibida, de 40 millones de euros, se ha quedado atascada en el momento de requerir la presentación del correspondiente aval.



Los últimos movimientos pretenden efectuar un Expediente de Regulación de Empleo extintivo, para anticiparse a la fecha de incorporación de la plantilla, que seguiría con la solicitud del cese definitivo de la actividad y la posterior liquidación de la sociedad. Las fechas de incorporación de la plantilla serían finales de marzo y abril.

J.J.N.R. continúa explicando que para solicitar la suspensión de la actividad, debe considerarlo apropiado el Consejo de Administración de la sociedad, quienes celebraron reunión hace un par de semanas, en la que mostraron su predisposición a aprobar el cese.

El 6 de marzo de 2013 iniciaron el trámite del ERE extintivo, que próximamente se presentará ante el Juzgado competente en su aprobación. Los administradores concursales aspiran a contar con el apoyo de los trabajadores; si no logran ese acuerdo, será el Juzgado quien decida. En cualquier caso, la resolución del ERE extintivo está aún sin resolver.

Una vez resuelto el ERE extintivo, se solicitará el cese definitivo de la actividad y por último, aprobado dicho cese, la liquidación de la empresa.

La Vicepresidenta pregunta cómo se encuadra la relación con los agricultores sujetos al programa agroambiental con la liquidación de la sociedad. Manifiesta que esa es una preocupación importante de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.

J.J.N.R. explica que la fase de liquidación, una vez contemplada como factible por el correspondiente auto del Juzgado, debe dar lugar a la elaboración de un Plan de Liquidación que contempla las operaciones de liquidación unidas a la manera en que se pretenderán afrontar los derechos adquiridos por terceros, como es el caso de las ayudas agroambientales destinadas a los agricultores.

Actualmente la empresa sólo es capaz de pagar el mantenimiento, la seguridad, y los pocos trabajadores aún en nómina. Los pagos comprometidos con los agricultores constituyen créditos contra la masa, lo cual implica la prevalencia, junto con otros compromisos adquiridos con posterioridad a la iniciación de la fase concursal, frente al resto de créditos pendientes con anterioridad.

En consecuencia, hasta el momento únicamente cuentan con borradores del Plan de Liquidación, ya que será posteriormente cuando deban elaborarse y presentarse ante el Juzgado.

Florencio Rodríguez Medina (representante de ASAJA) interviene para destacar que el compromiso de pago de las ayudas a los agricultores sigue existiendo, puesto que los agricultores beneficiarios de las ayudas siguen llevando a cabo las medidas del programa agroambiental.

J.J.N.R. constata que existen en torno a 16 millones de créditos contra la masa. En consecuencia, explica que siempre que se logre vender la infraestructura y los terrenos por encima de esta cantidad, estará garantizado el cobro de estas cantidades. Considera que es bastante probable que esto sea posible. Igualmente, si la venta se va produciendo parcialmente, la liquidación podría ser secuencial, y efectuarse parcialmente pagos de créditos contra la masa. En cualquier caso, no se procedería nunca a pagar compromisos preconcursales antes de haber pagado la totalidad de los compromisos adquiridos por la sociedad ante los agricultores.

F.R.M. destaca el valor del esfuerzo continuado de los agricultores y la necesidad de compensación por parte de la empresa, así como que se estudie la posibilidad de aunar esfuerzos para lograr que se adelanten estos pagos a los beneficiarios, teniendo en cuenta los efectos ambientales positivos de estas medidas. Además, plantea el empleo de avales constituidos por la empresa.

La Vicepresidenta señala que las explicaciones de los administradores concursales han confirmado que efectivamente los agricultores acabarán cobrando sus ayudas.

J.J.N.R. señala que la actitud de los administradores concursales ante la ejecución de los avales ha sido en todo momento de colaboración máxima, y que son partidarios de apoyar a los agricultores para que lleven a cabo las medidas agroambientales comprometidas en cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

El Presidente destaca que la Resolución del 14 de junio de 2012 declarando la suspensión temporal de la actividad aeroportuaria deja constancia de que continúa vigente la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas impuestas en la declaración de impacto ambiental.

La Vicepresidenta considera que todo parece indicar que efectivamente gran parte de las medidas impuestas se están cumpliendo, aunque no se están pagando por parte de la empresa, ni se está reflejando en los correspondientes informes de seguimiento ambiental.



Felipe Pulla Piedrabuena (Alcalde de Villar del Pozo) pregunta por los pagos pendientes de abonar a los Ayuntamientos, y la manera de afrontarlos, dentro de todo el proceso explicado por los administradores concursales.

J.J.N.R. explica que algunos de los pagos, los que correspondan a créditos contraídos contra la masa (posteriores a la declaración del concurso), tendrían la misma prioridad que los pagos a los agricultores. Sin embargo, los que respondan a créditos contraídos antes de la iniciación del concurso, deberán esperar a la liquidación definitiva de la sociedad. Se insiste de nuevo en que esta liquidación definitiva va a estar condicionada a la resolución de los temas pendientes en la Justicia, que se corresponden principalmente con las discusiones sobre la determinación del justiprecio de los terrenos expropiados para la instalación del aeropuerto. La solución de estos litigios supondrá la determinación definitiva de las deudas pendientes por la sociedad para su liquidación, así como la concreción del orden de preferencia en su abono.

Se comenta que el conflicto en la determinación del justiprecio asociado a las expropiaciones de los terrenos del aeropuerto supone el paso de 0,8 €/m² a 12 €/m², de acuerdo con el parecer del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Esta valoración está recurrida por la Administración Concursal ante el Tribunal Supremo, ya que supondría un incremento en los créditos superior a 50 millones de euros. Su resolución se va produciendo progresivamente.

Por último, J.J.N.R. apunta que algunos de los propietarios objeto de expropiaciones han manifestado su intención de reclamar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha indemnizaciones por esta cuestión.

Agustín Flores Vadillo (Administrador Concursal de Ciudad Real Aeropuertos, S.L.) destaca los notables perjuicios de estas cuestiones, unidos al hecho de que la entrada en vigor de la legislación que impone tasas a los procesos judiciales les está suponiendo unos gastos extra significativos.

F.P.P. pregunta que cuando se liquide la sociedad, quién cobrará las deudas en primer lugar.

J.J.N.R. responde que los créditos con las administraciones locales tienen cierto privilegio frente a otros créditos.

Juan Carlos Atienza Ortiz (SEO-Birdlife) pregunta sobre el tipo de suspensión que se va a solicitar ante AESA, en cuanto a su carácter temporal o definitivo.

J.J.N.R. contesta con la explicación de las fases del proceso: en primer lugar, ERE extintivo total; en segundo lugar, suspensión de la actividad empresarial, con autorización del Juzgado; y finalmente, cese definitivo de la actividad aeroportuaria.

J.C.A.O. pregunta si una vez concedida la autorización definitiva del cierre del aeropuerto, los nuevos propietarios de los terrenos requerirían una nueva autorización.

El Presidente contesta explicando que cualquier reapertura del aeropuerto tendría asociado un nuevo trámite de autorización en el que participaría la Dirección General de Aviación Civil y el Estado Mayor de la Defensa. Este trámite sería un procedimiento largo, de varios meses.

También destaca que incluso si se planteara el reinicio de la actividad aeroportuaria a partir del 14 de junio de 2013, cuando se finaliza el período de suspensión temporal del aeropuerto, sería necesario un procedimiento que duraría varios meses de trámite.

J.C.A.O. continúa planteando la cuestión de cómo se consideraría la vigencia de la declaración de impacto ambiental ante el cese definitivo de la actividad. Entiende que si la suspensión aeroportuaria es total, sería necesario un nuevo trámite de evaluación ambiental, la emisión de una nueva declaración de impacto ambiental para la reapertura, y sería necesario constituir de nuevo otra Comisión de Seguimiento distinta a la actual.

El Presidente contesta que esa cuestión debería ser analizada por los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como por la Abogacía del Estado. De nuevo subraya que hoy por hoy deben seguir siendo objeto de cumplimiento las medidas ambientales establecidas en la declaración de impacto ambiental del aeropuerto, mientras que no sea declarado el cese definitivo de su actividad. Comenta que han consultado cómo se ha podido proceder ante casos similares de infraestructuras de carreteras o ferroviarias, pero no hay casos con declaración de impacto ambiental con los que compararse. Considera que en todo caso, la Comisión de Seguimiento Ambiental debe continuar hasta que no cambie esta situación.

Se compromete a que la AESA procederá a investigar de qué forma procede actuar ante esta situación, en coordinación con el MAGRAMA y la Abogacía del Estado.



J.J.N.R. informa de que siempre que emprenden una negociación sobre la venta de las infraestructuras, la administración concursal informa de los requisitos ambientales establecidos en la declaración de impacto ambiental y de la existencia de la Comisión de Seguimiento Ambiental. En todo caso, el auto de adjudicación incluiría todas las obligaciones que se arrastran con el aeropuerto, incluidas las ambientales.

Se plantea, no obstante, que sería interesante analizar qué medidas podrían dejar de ser obligatorias ante la falta de actividad.

Adrián Vecino Varela (MAGRAMA) pregunta a los administradores concursales por el resto de las medidas ambientales establecidas en la evaluación ambiental del aeropuerto, al margen de las ayudas agroambientales: informes de seguimiento, estudios y censos de avifauna, etc.

J.J.N.R. manifiesta que el problema de liquidez de la empresa hace que los responsables de efectuar dichos estudios o informes no estén dispuestos a hacer los trabajos encargados, por la dificultad de cobro. Indica que los administradores concursales no pueden obligarles a realizar estas medidas.

José Manuel Hernández García (Ecologistas en Acción) interviene para subrayar que en consecuencia hay incumplimiento de las medidas establecidas, bien por los administradores concursales, bien por las entidades responsabilizadas de realizar los estudios. Pregunta sobre si el último informe de seguimiento (primer semestre de 2011) está pagado o no.

J.J.N.R. responde que alguno de los pagos a las entidades encargadas constituyen créditos contra la masa, mientras que en otros casos, son créditos concursales.

J.M.H.G. plantea que entonces podría ser un tema de incumplimiento de contrato, o que en cualquier caso habría que explorar la manera de solucionarlo.

Isabel Calatayud Velasco (SENASA) interviene para preguntar a los administradores si se ha requerido oficialmente la realización de estudios o informes a las entidades encargadas de su realización, independientemente de la forma de pago.

J.J.N.R. responde que se requirió su realización, pero que se rechazó llevarlos a cabo.

El Presidente plantea la conveniencia de disponer del contrato pertinente y del burofax o requerimiento donde se pidieran las ejecuciones de los estudios correspondientes.

J.M.H.G. plantea la cuestión de la inoperancia del Observatorio de Biodiversidad, dado que no ha tenido ninguna actividad desde hace algunos años, y no ha celebrado ninguna reunión desde mayo de 2011.

La Vicepresidenta explica que no hay material de seguimiento generado por el gestor aeroportuario sobre el cual se pueda pronunciar el Observatorio de Biodiversidad, que el Director del citado órgano no acudiría a las reuniones por falta de financiación de su traslado, y que por estos motivos no se ha producido ninguna reunión desde la anterior Comisión de Seguimiento. Los problemas que presenta la administración concursal para asumir los pagos de los traslados de los miembros del Observatorio de Biodiversidad son un impedimento para la celebración de sus reuniones.

J.J.N.R. plantea que el Director del Observatorio de Biodiversidad no tuviera que ser alguien residente en Sevilla, por los problemas de transporte que se originan.

A.F.V. comenta que por lógica, las poblaciones de aves en el entorno del aeropuerto siguen una progresión muy favorable por la inoperatividad del mismo, aunque sobre la evolución de la población de nutria no hay información.

El Presidente subraya que efectivamente la falta de funcionamiento del aeropuerto tiene algunas consecuencias ambientales positivas, pero que el problema radica en que no hay información ni seguimiento ambiental al respecto.

A.V.V. interviene para destacar la gravedad del asunto para la Comisión de la Unión Europea, teniendo en cuenta los antecedentes del aeropuerto y su repercusión allí. Plantea que el coste del desplazamiento del Director del Observatorio de Biodiversidad sería ridículo frente a la gravedad del tema.

J.M.H.G. apunta que su desplazamiento para las reuniones también debería ser sufragado por la sociedad promotora del aeropuerto.

J.J.N.R. comenta que no hay capacidad para asumir esos gastos actualmente.

La Vicepresidenta subraya que sin censos, informes ambientales, ni capacidad económica para realizarlos, el Director del Observatorio estimará probablemente poco útil reunir al órgano colegiado. Entiende que es un problema de recogida de información, más que de ineficiencia de las medidas desplegadas.



I.C.V. interviene para destacar que lo más importante es la forma de enfocar el asunto en la Comisión de la Unión Europea, y que actualmente siguen vigentes las obligaciones de cumplimiento de las medidas ambientales pese a la situación de suspensión temporal del aeropuerto.

José María Casillas Barral (SENASA) toma la palabra para señalar que no hay constancia de que las medidas llevadas a cabo por los agricultores se estén adaptando a las indicaciones del programa agroambiental al que tienen que ajustarse, así como a lo indicado por la declaración de impacto ambiental.

A.F.V. recuerda que hace algunos años se hicieron visitas sobre el terreno para dar fe de lo llevado a cabo por los agricultores en cumplimiento de las medidas agroambientales.

J.C.A.O. puntualiza que de acuerdo con la declaración de impacto ambiental, Ciudad Real Aeropuertos, S.L., debe financiar el Observatorio de Biodiversidad, con lo cual no hay duda de que deben pagar el billete de los miembros que así lo requieran.

Además, cita las indicaciones sobre el Director del Observatorio de Biodiversidad que se hacen en la declaración, por lo que considera justificado que proceda de la Estación Biológica de Doñana.

Considera necesario que se informe a la Comisión de Seguimiento de lo que realmente se está haciendo en cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, debido a que lo último presentado corresponde al primer semestre de 2011, y plantea la pregunta sobre si estando en la situación actual, procedería suspender algunas medidas o no. En cualquier caso, destaca que todos los incumplimientos encontrados deben dar lugar a los correspondientes expedientes sancionadores en cumplimiento de la legislación de evaluación ambiental.

A.F.V. y J.J.N.R. informan de que acaban de presentar al Presidente un borrador de contestación sobre las medidas llevadas a cabo, respondiendo a los requerimientos recibidos por parte de la Consejería de Agricultura y del propio órgano sustantivo. Destacan que algunas de las medidas impuestas sí se han llevado a cabo.

J.M.H.G. considera, por el contrario, que no se ha cumplido casi nada. Manifiesta su convencimiento de que la declaración de impacto ambiental no se ha llegado a cumplir nunca en realidad, y que los incumplimientos son más considerables aún desde el momento en que se torció la situación financiera de la sociedad promotora. Pone como ejemplo el hecho de que no se produzca inventarios desde hace varios años.

El Presidente corrobora que efectivamente se ha presentado antes de la reunión un borrador con información sobre las medidas ambientales ejecutadas actualmente.

A.F.V. apunta que se trata de un anticipo, para contrastar su contenido con el órgano sustantivo.

El Presidente informa de que cuando el borrador resulte un informe definitivo, se distribuirá entre los miembros de la Comisión.

Interviene el Secretario para destacar que inicialmente no se disponía del borrador indicado, y que por lo tanto procedía valorar en la reunión de la Comisión el cumplimiento de medidas a partir del informe del primer semestre de 2011. No obstante, al entrar en escena este nuevo documento presentado por los administradores concursales, se deduce que debe ser objeto de análisis y que se deberá reclamar su subsanación, en su caso.

El Presidente insiste una vez más en que las condiciones impuestas en la autorización del aeropuerto, que contempla las medidas ambientales resultantes de la evaluación ambiental de la infraestructura, siguen siendo de obligado cumplimiento. Informa de que será AESA, como órgano sustantivo, quien procederá a dar los pasos oportunos. Lamenta que actualmente no haya más información sobre el estado de cumplimiento de las medidas. Comenta que se examinará la información proporcionada por los administradores concursales, para tratar de determinar cómo se está cumpliendo los condicionantes ambientales del aeropuerto. Apunta que puede ser conveniente, una vez analizado, efectuar una nueva convocatoria de la Comisión más adelante.

J.C.A.O. anuncia que SEO/Birdlife va a proceder a denunciar el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental ante las autoridades españolas y la propia Comisión de la Unión Europea. Además, van a reclamar que no se pueda suspender totalmente la actividad del aeropuerto de Ciudad Real hasta que no se dé cumplimiento a la totalidad de los condicionantes establecidos en su trámite ambiental.

J.M.H.G. añade que en el caso de que se cambien los usos del terreno, para atribuirles una finalidad diferente a la del aeropuerto, debería ser informada la Comisión de Seguimiento Ambiental. Considera incluso la conveniencia de que en la Comisión de Seguimiento se valoren las posibles salidas para los terrenos con carácter previo a las operaciones que se realicen.



F.R.M. plantea la conveniencia de que cambios en el régimen de explotación impliquen cambios en las condiciones exigidas al aeropuerto, y que por lo tanto habría que modificar sus resoluciones de autorización.

A.V.V. manifiesta su acuerdo en que hay falta de información, pero destaca que realmente debe seguir cumpliéndose todo lo establecido en la declaración de impacto ambiental, a lo que el Presidente muestra su asentimiento.

I.C.V. pregunta sobre si el Consejo de Administración ha manifestado algo sobre la declaración de impacto ambiental.

J.J.N.R. responde que el Consejo de Administración no tiene ningún interés en continuar con la actividad del aeropuerto, y que ha manifestado su deseo de que se proceda a su venta y liquidación.

A.F.V. admite ciertas cuestiones que no han sido cumplidas, como la creación de una fundación y la financiación de una escuela de cerámica.

J.C.A.O. expresa sus dudas de que se hayan cumplido varias condiciones de la declaración de impacto ambiental, y en particular pregunta por la garantía financiera que exige la declaración de impacto ambiental.

J.J.N.R. contesta que se constituyeron unos avales que ya han sido ejecutados para pagar a los agricultores en dos campañas agrícolas. Por el contrario, posteriormente no se han constituido más avales.

J.C.A.O. concluye que no estaban garantizadas todas las medidas compensatorias.

J.J.N.R. rebate que los avales se correspondieron con las medidas correspondientes a unos años determinados.

La Vicepresidenta interviene para explicar que los avales que han podido ser ejecutados han sido los constituidos antes de la situación de concurso de la empresa, y que tras el mismo, no ha sido posible constituirlos, y por lo tanto, tampoco emplearlos.

J.C.A.O. considera que la declaración de impacto ambiental no hace referencia a garantías anuales, y manifiesta que no está de acuerdo con su discontinuidad.

I.C.V. explica que puesto que la infraestructura estaba diseñada para una explotación que durase indefinidamente, no podían constituirse garantías infinitas. El problema del aval ejecutado no es que fuera insuficiente, sino que tuvo que ser ejecutado, y que los posteriores no pudieron ser constituidos.

El Presidente muestra su acuerdo con I.C.V., y considera que debe estudiarse la viabilidad de toda la declaración de impacto ambiental.

J.M.H.G. pregunta si acaso los accionistas no tienen capital suficiente como para asumir estas garantías.

J.J.N.R. responde que los accionistas no tienen obligación de responder de las obligaciones de la sociedad, sino que únicamente pierden la cantidad que aportan a la sociedad. Por ejemplo, el Fondo de Garantía únicamente debe responder por el dinero que en su momento aportó la Caja de Castilla-La Mancha.

J.M.H.G. pregunta por el aval que aportó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

J.J.N.R. responde que hay que matizar el aval que se publicó hace unos años. La JCCM publicó una resolución mediante la cual creó una línea de avales destinada a facilitar la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real. Fue una declaración sobre el inicio de esa línea de créditos. Posteriormente se podría ir constituyendo avales poco a poco, materializando en realidad dichos avales.

A.F.V. matiza que de esa línea de avales se tiró para algunas cuestiones puntuales.

QUINTO: Ruegos y preguntas.

El Presidente pregunta a los asistentes si tienen algún otro asunto que comentar.

J.M.H.G. plantea la posibilidad de recibir la documentación en papel, por las dificultades de manejarla en formato digital. El Secretario contesta que no hay problema en hacerlo, y que se pondrá en contacto con él para matizar qué documentos en concreto querría recibir de los considerados en las últimas reuniones.

J.M.C.B. pregunta sobre la manera en que se podría obtener la documentación sobre lo realmente ejecutado en la actualidad para cumplir con las condiciones ambientales impuestas al aeropuerto.

El Presidente responde que lo apropiado es que se produzca a través del informe de seguimiento semestral al que está obligado el promotor del aeropuerto.

F.R.M. comenta que en el caso de los agricultores, están sujetos a los controles rigurosos de la PAC.

Fdo.: Javier Ariza Cantero



FIRMADO por : ARIZA CANTERO, JAVIER
FIRMADO por : FERNANDEZ-IRUEA, ALVARO
Total Folios: 10 (10 de 10) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S3A1709B2FB6460DFE8CEE
Verificable en <https://sede.fomento.gob.es/> O.M de 24/2/2011

Documento Verificable en www.boe.es mediante
DESCRIPCIÓN: FOMENTO DE TURISMO, ALVARO JOSE, A fecha: 26/07/2010 12:45 PM
FIRMADO por : FERNANDEZ-IRUEA, ALVARO JOSE, A fecha: 26/07/2010 12:45 PM



FIRMADO